PERÚ: Nivel 2

El Gobierno del Perú no cumple totalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo. El gobierno demostró haber realizado esfuerzos cada vez mayores en comparación con el período del informe anterior; por lo tanto, Perú se mantuvo en el Nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron más que duplicar la capacidad del gobierno para proporcionar servicios especializados a las víctimas de trata de niñas, niños y adolescentes, al abrir cuatro nuevos albergues para dichas víctimas, finalizar una guía para proporcionar planes de reintegración individualizados para las víctimas y aumentar las penas para las personas que compran actos sexuales de víctimas de trata de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Por segundo año consecutivo, el gobierno peruano recortó su presupuesto para abordar la trata y no completó un informe obligatorio al Congreso sobre la implementación de sus esfuerzos contra la trata. El gobierno no procesó ni condenó a ningún presunto tratante arrestado durante las operaciones en campamentos mineros ilegales en años anteriores, y los servicios para víctimas adultas y masculinas siguieron siendo inadecuados.

RECOMENDACIONES PRIORIZADAS:

Aumentar los esfuerzos para someter los delitos de trata sexual y laboral a acciones legales, condenar y castigar a los tratantes, y aplicar sentencias adecuadas a los tratantes condenados. * Mejorar la cooperación entre los funcionarios de justicia penal y entre los proveedores de servicios y aumentar los esfuerzos para emplear procedimientos centrados en las víctimas e informados sobre el trauma en las operaciones de aplicación de la ley, investigaciones y procedimientos de justicia penal. * Dedicar mayores recursos a la planificación de operaciones policiales multisectoriales basadas en la inteligencia que incluyen arreglos para el traslado inmediato de las víctimas a lugares seguros separados de los tratantes, entrevistas centradas en las víctimas y una transición rápida a la atención y al albergue para las víctimas identificadas. * Aumentar los esfuerzos para investigar y procesar judicialmente la corrupción relacionada con la trata y la complicidad de funcionarios, y condenar a los funcionarios cómplices por estos crímenes. * Continuar aumentando los fondos y el acceso a servicios especializados e integrales- que incluyen asistencia legal, médica, psicosocial, de refugio, de gestión de casos, educativa o vocacional y de reintegración-para todas las víctimas peruanas y extranjeras, incluidos hombres, niñas, niños y adolescentes LGBTI, y víctimas de explotación laboral. * Dedicar fondos adecuados en los presupuestos de ministerios y gobiernos regionales para llevar a cabo las acciones contra la trata y aumentar los recursos generales para combatir la explotación. * Desarrollar, implementar y capacitar a los funcionarios en protocolos a nivel gubernamental para guiar la identificación proactiva y la derivación de presuntas víctimas de explotación sexual y laboral, incluida la detección de indicadores de trata entre grupos vulnerables y que distinga la trata de delitos conexos. * Asegurar que los funcionarios de todos los sectores apliquen una definición de trata de personas consistente con los estándares internacionales, de modo que todas las víctimas de trata sexual o laboral tengan acceso a la atención adecuada. * Fortalecer e institucionalizar la capacitación en aplicación de las leyes contra la trata de personas, empleando procedimientos para la policía, fiscales y jueces centrados en las víctimas, y aplicar políticas para reducir la rotación entre la policía especializada. * Dejar de retener a las víctimas en las comisarías debido a insuficiente coordinación

entre las instituciones. * Actualizar los sistemas existentes para recopilar, mantener y reportar datos completos, armonizados y desglosados sobre los esfuerzos contra la trata. * Enmendar la ley contra la trata de personas para establecer sanciones por explotación sexual que sean proporcionales a las sanciones prescritas para otros delitos graves, como la violación. * Hacer cumplir las leyes contra los delitos que facilitan la trata, como el reclutamiento fraudulento de trabajo, minería y tala ilegal y operaciones de falsificaciones.

ACCIÓN JUDICIAL

El gobierno mantuvo los esfuerzos para llevar a cabo la acción judicial. El artículo 153 del código penal castiga la trata sexual y la trata laboral con penas de prisión establecidas de ocho a 15 años por delitos que involucran a víctimas adultas, prisión de 12 a 20 años por delitos que involucran a víctimas entre las edades de 14 y 18 años, y un mínimo de 25 años de prisión por delitos relacionados con víctimas menores de 14 años. Estas penas fueron lo suficientemente estrictas; sin embargo, con respecto a la explotación sexual, estas sanciones no son equivalentemente altas a las establecidas para otros delitos graves, como la violación. La ley define la trata en términos generales para incluir todas las formas de explotación laboral y adopción ilegal o venta de niños sin el propósito de explotación. El código penal también incluye delitos separados por "trabajo forzoso", "explotación sexual" y "esclavitud y otras formas de explotación" que conllevan penas de seis a 12 años de prisión, de 10 a 15 años de prisión y de 10 a 15 años de prisión, respectivamente. Estos artículos criminalizaban ciertas formas de trata sexual y laboral y se superponían significativamente con los delitos de trata prohibidos en el Artículo 153. El gobierno implementó el nuevo Código de Procedimiento Penal en 32 de 34 distritos judiciales. El código penal ha tenido un impacto positivo en los procedimientos de acciones judiciales, ya que las víctimas ya no están obligadas a presentar una queja para que el gobierno procese a un presunto tratante. En junio de 2019, el gobierno adoptó la Ley 30963, que incluyó delitos adicionales relacionados con la explotación sexual que podrían superponerse aún más con los delitos de trata.

La Dirección de Investigación de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM), la unidad especializada que opera en Lima y se enfoca en la trata de personas y delitos relacionados, reportó 186 operativos contra la trata, que resultaron en 364 arrestos por trata en 2019, en comparación con 158 operativos y 423 arrestos en 2018. Los fiscales de la unidad contra la trata del Ministerio Público participaron en 252 operativos contra la trata y detuvieron a 209 sospechosos, en comparación con 201 operaciones y 151 detenciones sospechosas en 2018 y 122 operativos en 2017. En 2019, el gobierno informó 67 acciones judiciales, 55 condenas y 23 absoluciones. El gobierno proporcionó datos actualizados para 2018 y reportó 142 acciones judiciales, 74 condenas y 19 absoluciones. El gobierno no reportó datos completos de sentencias de tratantes condenados.

En asociación con un gobierno extranjero, el Perú desarrolló una guía operativa para la policía y los fiscales sobre las mejores prácticas para casos de trata de personas que se aprobó en marzo de 2020. La policía realizó grandes operativos contra la trata de personas en lugares remotos en coordinación con varios ministerios. En agosto de 2019, el gobierno llevó a cabo una operación conjunta a gran escala en Callao, Huánuco, Lima, Moyobamba, Pichari, Puerto Maldonado y Trujillo, contra una red de crimen organizado llamada "Los Hermanos". Los funcionarios arrestaron y detuvieron a 12

personas por delitos de trata de personas, incluido el Jefe de Policía de la División de Investigaciones Criminales de Puerto Maldonado. No se llevaron a cabo acciones judiciales ni condenas; sin embargo, el gobierno tiene investigaciones activas abiertas contra todos estos individuos. El exjefe de policía fue liberado de detención preventiva a fines de 2019. El gobierno no reportó las actualizaciones sobre acciones judiciales o condenas a tratantes arrestados durante una operación para expulsar a mineros ilegales en La Pampa durante el período del informe anterior, ni actualizaciones sobre acciones judiciales o condenas a tratantes arrestados en La Pampa en mayo de 2018. En junio de 2019, el gobierno condenó a una pareja de esposos por trata de personas y esclavitud por someter a trabajadores a trabajos forzados dentro de un taller, donde dos trabajadores murieron en un incendio industrial. Las autoridades condenaron al esposo y a la esposa a 35 y 32 años de prisión, respectivamente. Tras la apelación, los jueces redujeron sus sentencias a 30 años para el esposo y 15 años para la esposa.

El gobierno y las ONG informaron que la complicidad de funcionarios en los delitos de trata y la corrupción generalizada en los sistemas judiciales y policiales peruanos obstaculizaron severamente los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata. Algunos oficiales de policía, incluidos miembros de las unidades especializadas contra la trata, presuntamente aceptaron sobornos de tratantes para evitar realizar investigaciones. Algunos jueces y fiscales podrían haber aceptado sobornos para rebajar los cargos de trata a delitos menores. Las autoridades no proporcionaron actualización sobre el arresto en 2018 de un exgeneral de la policía por presuntos delitos de trata relacionados con una red de adopción ilegal. No se reportaron acciones judiciales o sentencias condenatorias a funcionarios públicos por complicidad en delitos de trata.

Hay 190 policías en Lima que forman parte de la DIRCTPTIM. Otros 204 policías fueron asignados para cubrir trata de personas en el resto del país, resultando en un total de 394 policías, en comparación con los 398 policías especializados reportados en 2018. No existieron recursos suficientes para mantener unidades especializadas en todo el país. El gobierno no implementó una resolución ministerial que exigía que la policía contra la trata de personas permanezca en sus unidades durante al menos dos años, y la rotación frecuente en la policía continuó socavando la capacidad de la policía para combatir efectivamente la trata. Perú tiene 35 fiscales especializados en trata de personas en ocho regiones, con 11 de estos fiscales ubicados en Lima. En noviembre de 2019, el mandato de las fiscalías especializadas se amplió para incluir crímenes de explotación sexual, trabajo forzado y esclavitud. Anteriormente, sólo los casos imputados en virtud del artículo 153 del código penal podían asignarse a fiscales especializados; los casos de trata procesados como otros delitos, como el trabajo forzoso o la explotación sexual, fueron remitidos a un fiscal común. El gobierno y la sociedad civil informaron que estos cambios requerirían capacitación adicional para jueces y fiscales. Los funcionarios peruanos a menudo aplicaban una definición más restringida de trata que la definida en la ley peruana, como considerar el reclutamiento como un elemento esencial del delito de trata y aplicar los estatutos de trata sólo a los actos que ocurrieron antes de la explotación. Los jueces no recibieron la capacitación adecuada sobre trata. Las autoridades informaron que los jueces a menudo redujeron los cargos de trata sexual a delitos menores; requirieron pruebas de fuerza, fraude o coerción por delitos de trata sexual de niñas, niños y adolescentes; o no tuvieron en cuenta las edades de las víctimas y no aplicaron las disposiciones y sanciones pertinentes aplicables en casos de trata de niñas, niños y adolescentes. Las ONG y los funcionarios del gobierno informaron que la mala comunicación y la desconfianza entre la policía y los fiscales a

nivel nacional y regional obstaculizaron gravemente los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata de personas. Perú mantuvo acuerdos con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador para combatir la trata.

Aunque varios ministerios recopilaron datos para rastrear sus esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata y la protección de las víctimas, el gobierno carecía de un sistema coordinado de recopilación de datos, y la consistencia y disponibilidad de los datos sigue siendo una debilidad en la capacidad del gobierno para combatir la trata. El marco legal superpuesto del Perú complicó aún más los esfuerzos de recopilación de datos, ya que las autoridades a menudo procesaron casos de trata como delitos similares, como explotación sexual.

PROTECCIÓN

El gobierno mantuvo los esfuerzos para identificar y proteger a las víctimas de trata. La base de datos de la policía nacional (RETA) registró la identificación de 765 víctimas- incluidas 148 niñas, 38 niños y 579 adultos- en comparación con las 1,600 presuntas víctimas identificadas en 2018. Además, la DIRCTPTIM, que mantuvo su propia base de datos, reportó la identificación de 1,054 víctimas, incluidos 222 niñas y niños, y 832 adultos. La fiscalía especializada informó que identificó a 476 víctimas, en comparación con las 882 víctimas identificadas en 2018. No estuvo claro en qué medida las estadísticas de víctimas de la policía nacional, DIRCTPTIM, y de los fiscales se superpusieron. El gobierno realizó capacitaciones para ayudar a los funcionarios locales a mejorar su capacidad para identificar y remitir correctamente a las víctimas de trata, pero los informes aún indican que los esfuerzos de la policía y los fiscales siguen siendo inadecuados. El gobierno carecía de procedimientos estandarizados para que los funcionarios evaluaran los indicadores de trata entre las poblaciones vulnerables a las que asistían y remitieran a los sospechosos a los servicios. La policía y los fiscales no identificaron de manera efectiva los indicadores de trata entre mujeres dedicadas a la prostitución, y los funcionarios no distinguieron efectivamente entre trata y delitos similares, incluida la explotación sexual y el trabajo forzoso.

Las instituciones públicas poseen varios protocolos para brindar protección a las víctimas de trata, y recientemente desarrolló un nuevo protocolo centrado en la víctima para la reintegración de las víctimas de trata. El gobierno no especificó ningún resultado nuevo del protocolo adicional. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) fue responsable de coordinar y brindar servicios a las víctimas en asociación con los gobiernos regionales. La ley contra la trata de personas (Ley 28950) requería que el gobierno protegiera a las víctimas proporcionando alojamiento temporal, transporte, atención médica y psicológica, asistencia legal y asistencia para la reintegración; pero el gobierno no cumplió totalmente este mandato. Las autoridades mencionaron la falta de servicios de protección adecuados como un impedimento clave para su capacidad de combatir eficazmente la trata en el Perú, y a menudo los servicios a las víctimas se implementaron de manera desigual debido a la falta de coordinación a nivel nacional y local. A menudo, los funcionarios de justicia penal no emplearon un enfoque centrado en las víctimas, y en ocasiones llevaron a cabo operaciones contra la trata de personas sin los recursos adecuados, como lugares seguros para detectar posibles víctimas y brindar atención inmediata. No existían procedimientos o servicios específicos para las víctimas LGBTI, pero el gobierno desarrolló una guía de capacitación para ayudar a mejorar la capacidad del proveedor de servicios; las víctimas

transgénero, en particular, no recibieron la atención adecuada. Los servicios prestados a algunas víctimas de trata fueron en gran medida los mismos servicios ofrecidos a las víctimas de violencia o explotación sexual.

En el período del informe anterior, Perú aprobó una ley para fortalecer los servicios de acogida para víctimas de trata, sin embargo, los informes continuaron mostrando que muchos albergues para las víctimas no proporcionaban niveles adecuados de atención. Hubo 395 centros de emergencia (CEM) administrados por el MIMP disponibles para mujeres y sus hijos acompañantes que son víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. Estos centros proporcionaron alojamiento a corto plazo, así como servicios legales, psicológicos y sociales a un número no confirmado de mujeres víctimas de trata sexual, pero no son exclusivamente para víctimas de trata. Ciento cincuenta de los CEM están ubicados en comisarías. El Ministerio Público reportó 62 espacios de emergencia a los que las mujeres, niñas y niños podían acceder cuando no era posible derivarlos a un CEM. Las víctimas podían acceder a los espacios de acogida a corto plazo, pero no había servicios especializados disponibles para las víctimas de trata. Muchas ONG operaron albergues o proporcionaron otros servicios para víctimas sin el apoyo del gobierno. No existían instalaciones exclusivas para hombres adultos víctimas, y los informes indicaban que a los hombres a menudo se les negaban otros servicios.

El gobierno continuó implementando un decreto de 2017 que estableció unidades del MIMP responsables de brindar protección a las víctimas de trata de niñas, niños y adolescentes. La DIRCTPTIM refirió a las niñas, niños y adolescentes identificados al MIMP para coordinar los servicios; de aquellas identificadas, 130 víctimas recibieron servicios y 114 recibieron atención en un albergue especializado. La mayoría de las víctimas que recibieron servicios fueron niñas. Durante el período del informe, el gobierno aumentó significativamente su capacidad para proporcionar servicios especializados a las víctimas de trata de niñas, niños y adolescentes. Se adquirieron cuatro nuevos inmuebles, se restauraron con el apoyo de un donante extranjero y se abrieron en ellos nuevos albergues especializados para víctimas de trata de niñas, niños y adolescentes en las regiones de Cusco, Lima, Loreto y Puno. El gobierno continuó operando tres albergues adicionales exclusivamente para víctimas de trata en la región de Lima, incluido un albergue especializado para niñas víctimas abierto en el período del reporte anterior, lo que eleva la capacidad total de estos siete refugios a 130 niñas, niños y adolescentes. Los informes indicaron que los servicios y la dotación de personal en los albergues especializados fueron sólidos, con la inclusión en el personal de un abogado a tiempo completo, personal médico y psicológico. Sin embargo, todos los albergues especializados atendían exclusivamente a niñas. El MIMP continuó operando 48 centros residenciales adicionales a los que podían acceder las niñas víctimas de trata, pero estos refugios no eran exclusivamente para víctimas de trata de personas y faltaban servicios en estas instalaciones.

De las víctimas identificadas en 2019, 454 fueron víctimas extranjeras, un aumento de 235 víctimas extranjeras respecto de las identificadas en 2018. La mayoría de las víctimas extranjeras identificadas fueron venezolanas, con 270 víctimas adultas venezolanas y 31 niñas, niños y adolescentes venezolanos identificados. Otras víctimas extranjeras incluyeron 55 víctimas de Colombia, 96 víctimas de Ecuador, una víctima de Panamá y una víctima de Bolivia. Las víctimas extranjeras son elegibles para el estado de residencia temporal y permanente, así como la asistencia monetaria, pero el gobierno no informó sobre los servicios prestados a las víctimas extranjeras. El

gobierno coordinó con las ONG para repatriar a algunas víctimas extranjeras explotadas en el Perú; sin embargo, muchas de las víctimas de trata extranjeras decidieron permanecer en el Perú. Como resultado de una asociación bilateral, el Perú participó en una operación conjunta con Ecuador, resultando en 37 víctimas ecuatorianas identificadas.

La ley requiere que el gobierno brinde representación legal a las víctimas, salvaguarde sus derechos legales y las guíe a través del sistema legal. El gobierno tiene varias agencias responsables de proporcionar asistencia psicológica y social, así como asesoramiento legal a las víctimas. Un programa de asistencia a víctimas dirigido por el Ministerio Público informó que ayudó a 920 víctimas con acceso a servicios legales y psicológicos. Sin embargo, según los informes de las ONG, a menudo, los servicios dependían de que las víctimas proporcionaran sus declaraciones a los agentes de investigación. El gobierno no informó si alguna víctima recibió indemnización en 2019. Los procedimientos inadecuados de identificación de la víctima pueden haber llevado a las autoridades a arrestar, detener o penalizar a las víctimas de trata por actos ilegales que los traficantes las obligaron a cometer. En ocasiones, las autoridades colocaron a niñas, niños y adolescentes víctimas en las comisarías entre niñas, niños y adolescentes detenidos por delitos, donde las víctimas enfrentaron condiciones similares a la detención mientras esperaban la derivación al albergue.

PREVENCIÓN

El gobierno mantuvo los esfuerzos para la prevención. El Ministerio del Interior (MININTER) continuó siendo el único ministerio con un presupuesto dedicado para los esfuerzos contra la trata. El MININTER asignó aproximadamente cuatro millones de soles (US\$1.21 millones) a actividades contra la trata de personas en 2019, una disminución de aproximadamente ocho millones de soles (US\$2.41 millones) dedicados a la lucha contra la trata de personas en 2018. Muchas víctimas recibieron asistencia general no incluida en estas cifras, y varios ministerios llevaron a cabo actividades contra la trata, sin embargo, no tenían un presupuesto específico para la trata. El gobierno informó que se desarrolló un nuevo marco para monitorear la implementación del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas, vigente hasta 2021. La comisión multisectorial que coordinó los esfuerzos contra la trata en el Perú fue responsable de coordinar la implementación del plan nacional contra la trata y la preparación del presupuesto correspondiente. Se requirió que el gobierno produjera un informe sobre sus esfuerzos contra la trata y lo presentara al Congreso, sin embargo, este año no pudo preparar este informe dentro de los parámetros requeridos. La inestabilidad política impactó la coordinación ministerial para implementar el plan contra la trata del Perú durante el período del informe. Funcionarios de todos los niveles señalaron que el financiamiento inadecuado obstaculizó su capacidad para combatir eficazmente la trata de personas, especialmente los esfuerzos de protección de las víctimas.

Veintitrés de los 24 gobiernos regionales tenían planes operativos para abordar la trata de personas a nivel local. El gobierno continuó la implementación del plan para aumentar la protección de las trabajadoras del hogar, que incluyó fortalecer la supervisión de las agencias de empleo y mejorar las respuestas a la sospecha de trabajo forzado o trabajo infantil. El gobierno firmó una iniciativa mundial llamada Alianza 8.7 dedicada a eliminar la trata de personas y asuntos relacionados.

La Superintendencia Nacional de Inspección Laboral (SUNAFIL) abrió cinco nuevas oficinas regionales de inspección laboral, para un total de 21 oficinas de inspección laboral en todo el país. Sin embargo, el gobierno informó una disminución en el número de inspectores de SUNAFIL en todo el país de 636 a 607 y señaló que el personal no era suficiente. Un equipo de SUNAFIL se especializó en inspecciones de trabajo infantil y forzado, y los inspectores de trabajo participaron en redadas conjuntas con la policía que condujeron a la identificación de víctimas. Además, SUNAFIL aprobó un nuevo protocolo para inspecciones especializadas en trabajo infantil y forzoso, así como un nuevo protocolo para proteger a los trabajadores extranjeros. SUNAFIL realizó 102 actividades de sensibilización en persona sobre el trabajo forzado y el trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementó un nuevo proceso de acreditación para empresas que producen productos agrícolas libres de trabajo infantil.

El gobierno ofreció talleres de capacitación y sensibilización en persona en 10 regiones del país y cuatro talleres virtuales sobre identificación de trata de personas y derivación de víctimas, llegando a más de 800 empleados gubernamentales y miembros de la sociedad civil. Las autoridades también organizaron un taller para 120 oficiales de policía para ayudar a mejorar su capacidad de identificar a las víctimas. El gobierno informó sobre los esfuerzos para crear conciencia entre el sector turístico al proporcionar asistencia técnica a 22 regiones sobre la trata de personas y el turismo. Otros esfuerzos de sensibilización incluyeron la producción y difusión de materiales de sensibilización escritos a través de las redes sociales, varias ferias, desfiles, talleres y programas de televisión. El gobierno también apoyó varias iniciativas específicamente destinadas a educar a niñas, niños y estudiantes, incluidos talleres para estudiantes, campañas informativas en estaciones de transporte y distribución de materiales escritos. El MIMP continuó operando su programa de educadores callejeros para alcanzar a las niñas, niños y adolescentes involucrados en la mendicidad y otros posibles casos de explotación. Varios ministerios realizaron esfuerzos adicionales de sensibilización, a menudo en asociación con organizaciones internacionales y ONG, y con financiación de donantes extranjeros.

Las ONG informaron que el gobierno a menudo proporcionaba contribuciones en especie a actividades de capacitación dirigidas por la sociedad civil. Otras actividades de capacitación y sensibilización coordinadas por ONG y a menudo apoyadas por el gobierno incluyeron capacitación para 253 jueces, abogados y fiscales sobre trata de personas, capacitación virtual para 821 defensores públicos, capacitación para 289 proveedores de servicios de albergues, 11 talleres para oficiales de policía sobre enfoques, capacitación y talleres centrados en las víctimas para funcionarios del sector justicia, cursos generales sobre la trata de personas, capacitaciones sobre investigaciones y procesamiento judicial de trata de personas, y asistencia técnica y capacitación para albergues especializados.

Los funcionarios buscaron mitigar la vulnerabilidad de la población venezolana a la trata mediante la realización de campañas de sensibilización para los extranjeros. El gobierno estimó que 404,000 venezolanos tienen permisos de trabajo temporales y que están en emisión 160,000 permisos adicionales. El gobierno no informó sobre los esfuerzos para prevenir el turismo sexual infantil. El gobierno mejoró los esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales comerciales al aumentar las penas para los

consumidores de trata sexual infantil de un rango de cuatro a seis años de prisión a uno de 15 a 20 años cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años.

PERFIL DE TRATA

Como se informó en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en el Perú, así como a víctimas peruanas en el extranjero. Las ONG y los funcionarios gubernamentales informan que la complicidad de algunos funcionarios en los delitos de trata y la corrupción generalizada en los sistemas judicial y policial peruanos continúan obstaculizando los esfuerzos contra la trata. Las comunidades ubicadas cerca de operaciones mineras ilegales a menudo son remotas y carecen de una presencia estatal permanente, lo que aumenta la probabilidad de actividades ilícitas, incluida la explotación sexual y laboral. Los migrantes y refugiados venezolanos que ingresan al país corren un alto riesgo de trata. Desde 2016, más de 863,000 venezolanos que huyen de la crisis humanitaria en su país han ingresado al Perú, y algunas estimaciones muestran que hasta un millón de venezolanos han ingresado al país; los tratantes someten a adultos y niños venezolanos a la explotación sexual y laboral en el camino hacia o después de su llegada al Perú. Los tratantes explotan a mujeres y niñas en trata sexual cerca de las comunidades mineras; estas víctimas a menudo están endeudadas debido al costo del transporte y no pueden salir debido a la lejanía de los campamentos y la complicidad de los mineros en su explotación. La alta demanda de comercio sexual en estas ciudades aumenta los incentivos para que los tratantes traigan mujeres y niñas de varias regiones del Perú, incluidas venezolanas, y de Bolivia. Turistas de Estados Unidos y Europa pagan por sexo con víctimas de trata infantil en áreas como Cusco, Lima y la Amazonía peruana. En la región Loreto, los grupos criminales facilitan el transporte de turistas extranjeros en bote a lugares remotos en el río Amazonas donde los tratantes explotan a mujeres, niñas y niños en trata sexual. Los tratantes explotan a mujeres y niñas peruanas y extranjeras, y en menor medida a niños, en trata sexual dentro del país; los tratantes a menudo reclutan víctimas a través de ofertas de empleo falsas y, cada vez más, en plataformas de redes sociales. Los tratantes explotan a mujeres, niñas y niños peruanos en trata sexual en otros países, particularmente dentro de América del Sur, y explotan a mujeres y niñas de países vecinos en el Perú. Los peruanos LGBTI están en riesgo de trata. Los tratantes explotan a hombres, mujeres, niñas y niños peruanos y extranjeros en trabajos forzados en el país, principalmente en minería de oro ilegal y legal así como servicios relacionados, tala, agricultura, fabricación de ladrillos, fábricas no registradas, operaciones de falsificaciones, mendicidad organizada en las calles y servicio doméstico. Los tratantes someten a peruanos a trabajos forzados en minas de oro artesanales y campamentos improvisados cercanos que brindan servicios a los mineros; los tratantes reclutan a las víctimas a través de ofertas engañosas, y las mantienen bajo coerción basada en la deuda, libertad de movimiento restringida, la retención o el no pago de salarios, y las amenazas y el uso de violencia física. Los tratantes someten a niñas y niños a trabajos forzados en mendicidad, venta ambulante, servicio doméstico, producción y transporte de cocaína y otras actividades delictivas. La organización narcoterrorista Sendero Luminoso recluta niños usando la fuerza y la coerción para servir como combatientes o guardias, y usa la fuerza y la coerción para someter a niños y adultos a trabajos forzados en la agricultura, cultivo o transporte de estupefacientes ilícitos y la servidumbre doméstica, así como para llevar a cabo sus actividades terroristas. Los tratantes someten a hombres, mujeres, niñas y niños peruanos a trabajos forzados en otros países de América del Sur, Estados Unidos y otros países.